

Perspectivas de la economía

■
La perspectiva dominante para los próximos meses es que la actividad económica mantenga su tendencia ascendente, aunque a un ritmo menor que el verificado hasta el momento.

■
La persistencia de una tasa de inflación elevada y la creciente preocupación por el abastecimiento energético y la política impositiva constituyen los problemas a mediano plazo.

■
Pese al crecimiento del mercado interno, el elevado tipo de cambio real y la fuerte demanda interna, subsisten dudas en los inversores y resulta poco probable un salto sustancial de la inversión.

El resultado de las elecciones legislativas de octubre representa una clara consolidación del poder político del gobierno actual. Desde la perspectiva del análisis económico significa una alta probabilidad de continuidad del esquema de política económica basado en una fuerte intervención estatal. El objetivo prioritario consiste en mantener un alto nivel de actividad económica, a través de estímulos a la demanda interna por la vía del gasto público, subsidios y regulaciones de precios; y de la demanda externa a través del sostenimiento de un tipo de cambio real elevado. La estabilidad macroeconómica tiene como principal sustento un elevado superávit fiscal, generado por una fuerte presión impositiva sobre actividades formales y en particular, sobre sectores exportadores.

El proceso de recuperación de la economía se mantiene y hasta el momento no se observan signos de desaceleración en el ritmo de crecimiento. Bahía Blanca y su región no escapa a esta tendencia general. En líneas generales, se observa repuntes en la mayoría de los indicadores económicos tales como nivel de depósitos, patentamientos, nuevas construcciones y empleo. Los niveles actuales en la mayor parte de los casos, trasponen el umbral del máximo registro histórico alcanzado sobre fines de la década pasada.

La perspectiva dominante para los próximos meses es que la actividad mantenga su tendencia ascendente, pero a un ritmo menor. Esta tendencia podría ser impulsada por el propio gobierno de acuerdo a los anuncios postelectorales, anticipando la intención de recomponer el superávit primario a través de un menor ritmo de expansión del gasto público. No resulta aún clara la dirección de la política monetaria, dado que sus autoridades no transmiten un mensaje claro en torno a la opción entre sostener el tipo de cambio y controlar la emisión monetaria.

En este marco, el escenario de los próximos meses plantea el problema de la persistencia de una tasa de inflación elevada, como efecto del fuerte crecimiento observado en la demanda y las restricciones en la expansión de la oferta por el agotamiento de la capacidad instalada en sectores productores de bienes. Una inflación superior a los dos dígitos anuales genera tensiones en la sociedad al deteriorar la capacidad de consumo de los sectores de menores ingresos y, tal como se ha podido observar desde fines del año pasado, acentúa los reclamos por aumentos salariales, muchas veces acompañados por medidas de fuerza que interfieren procesos de producción. La tendencia declinante de los indicadores de pobreza podría revertirse si persisten los aumentos de los precios que conforman la canasta básica de consumo en un contexto de menor ritmo de expansión de la actividad económica.

En Bahía Blanca, de acuerdo a los datos oficiales, se observa una tendencia a la baja en el porcentaje de hogares pobres durante los últimos dos años. No obstante, el nivel actual resulta

elevado en comparación a los niveles previos a la última crisis económica. Por otra parte, desde entonces, si se toma los datos del país como punto de referencia, se observa que el problema de la pobreza reviste una particular gravedad en el plano local.

Con una menor tasa de crecimiento y una inflación elevada, los reclamos de sindicatos por reajustes salariales podrían intensificarse. La incertidumbre crece por las posibles respuestas del gobierno; generalmente apelando a medidas parciales que buscan penalizar a sectores que registren aumentos de precios. Estas medidas no contribuyen a crear un clima propicio para pensar en proyectos privados a largo plazo. La persistencia de la inflación, combinada con una política de sostenimiento del tipo de cambio y de aplicación de retenciones a las exportaciones, añade el problema de deterioro en los márgenes de rentabilidad de la actividad agrícola. En la región se suman bajos rendimientos de los cultivos por la escasez de precipitaciones y ventas de hacienda por falta de pasturas. Todos estos factores han deteriorado severamente la capacidad de generación de ingresos de la actividad en la región, al menos durante la campaña actual, y constituye un elemento que podría contribuir a desacelerar el ritmo de actividad local.

Además de lo señalado, se adiciona como factor de incertidumbre el problema del abastecimiento energético y la política impositiva. La política de congelamiento de tarifas, una de las principales estrategias para contener la inflación después de la devaluación, determinó la cancelación de inversiones de empresas en nuevos proyectos que permitan expandir la capacidad de oferta del servicio. El costo de la estrategia contra la inflación, se manifiesta en la actualidad por el riesgo de desabastecimiento energético, y por lo tanto, representa uno de los principales factores condicionantes del despegue de la inversión privada. A ello, habría que sumar otros costos impuestos por la crisis energética como el incumplimiento de compromisos comerciales por exportaciones de gas a Chile y el retiro del Grupo Suez en los últimos meses. Estos conflictos representan nuevos antecedentes que restan crédito a la imagen del país frente a potenciales inversores del exterior. El espacio de operadores extranjeros se ha cubierto por nuevos grupos empresarios, con fuerte protagonismo de grupos argentinos. Las reservas energéticas han disminuido, y el abastecimiento se ha resuelto por el momento con planes de incentivos a consumidores e importaciones de combustibles. El principal proveedor de gas, Bolivia, atraviesa una etapa de fuerte inestabilidad política y la demanda argentina enfrenta la competencia de Brasil. Para completar el panorama, la demanda para consumo doméstico en el país tiende a crecer acompañando el aumento del ingreso y, de concretarse nuevas inversiones, requeriría no menos de un par de años para su puesta en marcha. En pocas palabras, el futuro abastecimiento energético presenta muchos interrogantes postergando la iniciación de proyectos industriales a gran escala.

En relación a la política impositiva, cabe una consideración similar. Los notables resultados en materia de recaudación han permitido al gobierno exhibir una sólida situación financiera. El superávit actual se sostiene sobre impuestos distorsivos como el que recae sobre transacciones financieras y las retenciones sobre exportaciones. Mantener este esquema impositivo desalienta inversiones en el sector exportador y conspira contra las posibilidades de crecimiento.

Mientras la incertidumbre entre inversores se traduce en la postergación de proyectos que contribuirían a aumentar la capacidad de producción de bienes, desde el gobierno se ha buscado compensar la falta de inversión privada, alentando la oferta interna por la vía de subsidios y desalentando exportaciones de productos críticos; a través de aumento de retenciones, eliminación de reintegros o directamente prohibiendo las ventas al exterior, como por ejemplo, la venta de gas a Chile. Cabe advertir que este tipo de medidas coyunturales imponen costos a largo plazo por cuanto postergan el despegue de la inversión privada.

Con una menor tasa de crecimiento y una inflación elevada, los reclamos de sindicatos por reajustes salariales podrían intensificarse.

El futuro abastecimiento energético presenta muchos interrogantes postergando la iniciación de proyectos industriales a gran escala.

En la medida que no haya una mayor oferta interna de bienes y los niveles de inflación sigan generando presiones a través de la intensificación de reclamos sociales, el problema exigirá nuevas respuestas. Entre las alternativas, cabría señalar la posibilidad de aumentar la oferta externa de bienes –importaciones– a través de una disminución del tipo de cambio y una mayor apertura de la economía a través de la reducción de barreras comerciales. Esta última alternativa resulta improbable por cuanto significaría un cambio de los lineamientos básicos de la política económica adoptada por el gobierno actual.

En resumen, se perfila una situación general caracterizada por un nivel elevado de actividad pero estable, continuidad de presiones inflacionarias y por lo tanto, de reclamos por la recomposición de salarios. Pese al crecimiento del mercado interno, el alto nivel del tipo de cambio real y el fuerte ritmo de demanda interna, no se terminan de disipar las dudas de los inversores y resulta poco probable que se asista a un salto sustancial de la inversión. Mientras esto no suceda, no estará garantizada la sustentabilidad del crecimiento económico a largo plazo. Pese al notable crecimiento de los últimos años, resta mucho por hacer para descartar la posibilidad de que los últimos años sean una fase más en el histórico proceso de la economía argentina signada por la sucesión de recesiones y recuperaciones. ■